

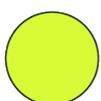
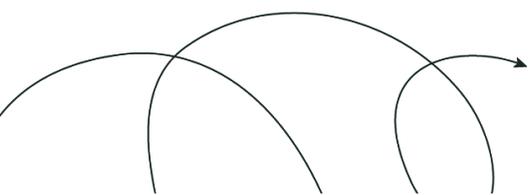
Honduras: entre los escombros y la esperanza

Espacios cívicos, entre co-gobernar y evitar la cooptación

De cara a la compleja coyuntura que viven algunos países de Centroamérica y México, Linterna Verde contribuirá con informes de "aterizaje país" en los que se van a describir las mayores amenazas y oportunidades para el espacio cívico de 7 países de la región. Además, se producirá un boletín mensual de investigación digital que busca ofrecer una mirada al bosque de la conversación digital en la región y la posibilidad de responder a preguntas sobre árboles específicos que sean estratégicos para el trabajo de las organizaciones.

En este documento se presenta el informe de Honduras el cual está dividido en tres secciones: Contexto, Actores políticos y Espacios cívicos, incluyendo prioridades y la situación de contrarreloj para las organizaciones de la sociedad civil. Resaltan dentro de esta última el Fortalecimiento institucional, la Lucha contra la impunidad y las Oportunidades de avances en derechos sexuales y reproductivos para las mujeres.

Para este reporte, Linterna Verde realizó entrevistas con 14 actores políticos y de la sociedad civil hondureña, además de lecturas de investigaciones periodísticas e informes institucionales. Las entrevistas, para enriquecer la profundidad del análisis, se hicieron de manera anónima con activistas, periodistas, diplomáticos, asesores, políticos y funcionarios. En aras de guardar su identidad, pero orientar



sobre su origen, se acreditará la profesión de la persona en cada frase citada. Las entrevistas se realizaron entre el 7 de febrero y el 9 de marzo de 2022.

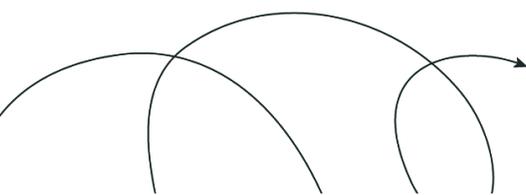
1. Contexto

Durante la última década, Honduras ha sido la democracia más restringida de Centroamérica, el país más autoritario, con más presencia del crimen organizado, con mayores niveles de pobreza, y cuyas organizaciones sociales han sufrido mayor represión. También es el país con más esperanzas y posibilidades de cambios y de ampliación de espacios cívicos en Centroamérica en 2022.

En las elecciones del 28 de noviembre de 2021 ocurrió un punto de inflexión tras el golpe de Estado de 2009 y el fraude electoral de 2017. “Con la mayor expectativa electoral desde el inicio de la democracia hace 40 años, la ciudadanía asistió masivamente a las urnas; significaba el último recurso para revertir el deterioro institucional y la dinámica de corrupción y abusos que ha mantenido en jaque a Honduras en los últimos 12 años”, publicó [en la revista Envío](#) el sacerdote jesuita Ismael Melo, uno de los activistas y comunicadores más respetados del país.

‘Mantener en jaque a un país’ tiene características particulares. La Honduras del Partido Nacional a la que han resistido las organizaciones de la sociedad civil es la siguiente. Solo en 2020 “hubo ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratamientos inhumanos en prisiones, arrestos arbitrarios, asesinatos o amenazas a periodistas, corrupción hasta las más altas esferas del Gobierno, falta de investigación y condenas para la violencia contra mujeres, y amenazas y violencia contra las comunidades afro, de pueblos indígenas y de la comunidad LGBTI.” “Grupos del crimen organizado perpetraron crímenes violentos como homicidios, torturas, secuestros o extorsiones contra defensores de derechos humanos, autoridades judiciales, abogados, empresarios, periodistas, mujeres y otras poblaciones vulnerables.” Esta información se encuentra en el último [reporte](#) disponible sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado estadounidense.

A este contexto se suman los aprendizajes provenientes de los avances y retrocesos en la justicia en Guatemala, de los avances y retrocesos democráticos en El Salvador, y del caso de Nicaragua, con un gobierno autoritario desde 2007, que desde 2018



cerró con [violencia](#) todos los espacios cívicos y culminó con unas elecciones sin candidatos opositores en 2021.

Transición

Un hecho marca el inicio del Gobierno de Xiomara Castro: A 20 días de su toma de posesión, el 15 de febrero de 2022, fue capturado con fines de extradición a Nueva York el expresidente Juan Orlando Hernández (JOH).

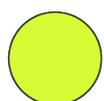
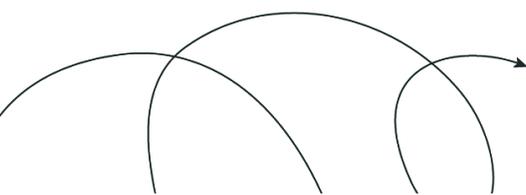
Si bien los últimos 18 años registraron varias capturas de ex presidentes centroamericanos en Guatemala y El Salvador por casos de corrupción, la detención del hondureño Juan Orlando Hernández (JOH) “es de otra magnitud”, casi comparable con la intervención estadounidense para capturar al dictador panameño Manuel Noriega en 1989, por narcotráfico también, según un periodista centroamericano entrevistado.

JOH fue el presidente del Congreso hondureño en 2009, cuando el Partido Nacional conspiró para legalizar el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, después se convirtió en Presidente de la República en 2013 y se reeligió de [manera fraudulenta](#) en 2017, en unas elecciones que la OEA había pedido repetir. Durante esos doce años se convirtió en la persona más poderosa en Honduras, y usó ese poder para acabar con los contrapesos institucionales y asfixiar los espacios cívicos.

“Tras el golpe de Estado de 2009, la alianza conservadora construyó un andamiaje legal para una dictadura. Todo el aparato político está construido para reprimir a la ciudadanía y en especial a organizaciones ambientalistas”, coinciden un diplomático y un periodista, ambos centroamericanos, entrevistados por Linterna.

Además, usó ese poder autoritario para convertir a Honduras en lo que organizaciones sociales han calificado de una “narco-dictadura”. Probablemente JOH será acusado en Nueva York, como su hermano Juan Antonio Hernández en 2018, de traficar al menos 185 toneladas de cocaína, suficiente para suministrar cinco dosis para cada persona viviendo en Estados Unidos, según [el cálculo del periodista Jon Lee Anderson](#) en *The New Yorker*.

Esta introducción, descriptiva de la crítica situación en la que se encuentra Honduras, es fundamental para comprender el contexto de las disyuntivas en las que se



encuentran las organizaciones de la sociedad civil en el momento de tomar decisiones sobre sus formas de actuar y participar en la reconstrucción del espacio cívico del país.

Manteniendo las proporciones y aunque ambos tienen gobiernos de izquierda, la Honduras que recibe a Xiomara Castro y sus aliados de movimientos sociales, no es equiparable al Chile que recibe a Gabriel Boric y sus aliados de movimientos sociales. Están en polos opuestos.

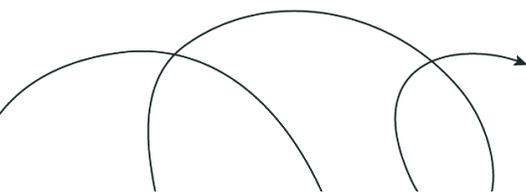
2. Actores políticos

El gobierno de los Zelaya Castro

Una democracia se caracteriza, entre otras cosas, porque en el gobierno hay personas que empatizan con las necesidades de la ciudadanía, se promueven las instituciones como los partidos políticos y la carrera de los servidores públicos, y se desaconseja el nepotismo. En la teoría se señala que las organizaciones de la sociedad civil deberían marcar cierta distancia respecto a su participación en política gubernamental, para salvaguardar los espacios cívicos y estar atentos a denunciar los excesos que se presentan desde el poder gubernamental.

Pero Honduras está en una nueva transición del autoritarismo hacia la democracia. Después del golpe de Estado de 2009 y el fraude electoral de 2017, la solidez de las instituciones democráticas es endeble, y es probable que la única 'fuerza política' con la capacidad para derrotar en las urnas al Partido Nacional, que además tuviera el conocimiento profundo del Estado, y los contactos para convocar a equipos para reconstruir Honduras, era la pareja Xiomara Castro y Manuel Zelaya.

Para comprender mejor la dinámica del nuevo actor de poder en la jefatura de Estado de Honduras, es importante alejarse de la idea que Xiomara Castro es una subalterna de Manuel Zelaya. Para esto hay que recordar dos puntos: El primero es que la presidenta Xiomara Castro de Zelaya está separada del expresidente Manuel Zelaya; ya no son una pareja sentimental, sino dos amigos y compañeros políticos. Un segundo punto es que sus cuatro hijos también son actores políticos claves dentro del Gobierno, y muchas decisiones trascendentales se toman entre la presidenta Castro, el expresidente Zelaya y sus hijos, uno Secretario y otra diputada. Esto lo confirmaron tres fuentes consultadas por Linterna.



Hay dos Manuel Zelaya en el Gobierno: el expresidente y coordinador de Libre por un lado, y su sobrino y Secretario de Defensa por otro; son homónimos. A Manuel Zelaya Rosales, el expresidente, los hondureños se refieren como “Mel”. Para diferenciar al expresidente de su sobrino y secretario de Defensa, en este informe se utilizará ese sobrenombre.

“La relación entre ambos (Xiomara y Mel) es amistosa y de camaradería. Ella se hace cargo de algunas áreas del Gobierno y él de otras. Ella avanza en cumplir promesas, él la ayuda a resolver la relación con otros actores políticos, como los disidentes de Libre, los caciques regionales y así. Muchas decisiones del Gobierno se toman en familia, entre la pareja y los cuatro hijos, Héctor (secretario privado de la Presidencia, el más activo e influyente), la Pichu (Ortencia, diputada), Zoe y José Manuel”, dice una de las fuentes consultadas, muy cercana a la familia Zelaya Castro, que entre algunos activistas se conoce como ‘el Familión’.

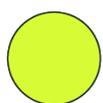
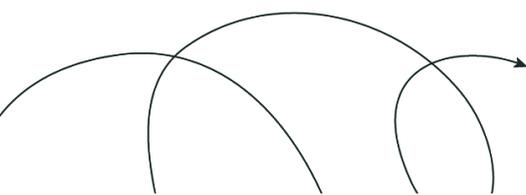
El Familión se extiende al sobrino y Secretario de Defensa, Manuel Zelaya (homónimo del expresidente), quien es hijo de Carlos Zelaya. Según [InsightCrime](#), es probable que uno de los narcotraficantes juzgados en Nueva York haya señalado a Carlos Zelaya Rosales, acusación negada por este último.

Con sus contradicciones y su experiencia, el gobierno de Xiomara Castro ha empezado a mandar mensajes claros de rescate del Estado y la democracia participativa en Honduras.

No se percibe desde la mayoría de los actores políticos entrevistados un rechazo marcado hacia el tipo de gobierno ‘familiar’; se considera a Xiomara Castro y Manuel Zelaya como los líderes naturales del esfuerzo de 12 años por revertir el Golpe y recuperar al país de la ‘narco-dictadura’ de JOH y el Partido Nacional. “Es lo que hay”, respondió un analista.

Los actores de Seguridad y Defensa

La primera decisión trascendental en la captura de JOH: La persona que colocó las esposas al expresidente Juan Orlando Hernández el 15 de febrero no era un oficial cualquiera. Se trata del general Ramón Sabillón, quien era el hombre fuerte antinarcóticos en Honduras –aliado de la DEA– hasta 2014. Ese año terminó su carrera por la osadía de haber capturado para extradición a los líderes del Cartel del Valle, sin



aviso previo al presidente JOH, en un caso que empezaría a relacionar directamente al entonces jefe de Estado con el narco.

En mayo de 2016, Sabillón tuvo que salir al exilio hacia Houston, Texas, bajo la protección de EE.UU. Regresó al país en enero de 2022 para ponerse a las órdenes de Xiomara Castro. La primera prioridad para Estados Unidos en cualquier país del mundo, pero en especial en Centroamérica, es el tema de seguridad. Xiomara Castro de Zelaya regresó el poder de la Secretaría de Seguridad a una persona cercana a Washington y a la DEA.

Una segunda decisión trascendental del gobierno de los Zelaya Castro, quienes vivieron el exilio tras el golpe de Estado de 2009, es revertir la militarización del Estado hondureño por parte de la alianza del Partido Nacional y la élite empresarial.

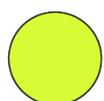
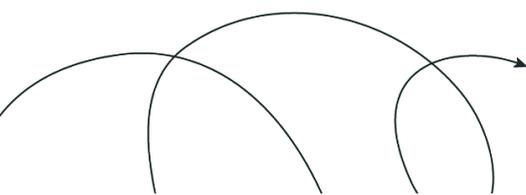
“La Policía Militar, hasta ahora encargada de las cárceles y tareas de represión política, ya no se encargará de las prisiones, que regresarán a la Policía Nacional Civil, y ahora la Policía Militar se dedicará a tareas de protección del medioambiente”, explicó un funcionario del Gobierno.

Narcotráfico, militares y grandes empresarios

Sobre lo que hay un consenso es que a pesar del cambio de Gobierno y la captura de JOH, las estructuras de poder continúan siendo hegemónicas en Honduras. Los poderes fácticos en Honduras, pero en especial en los últimos 12 años, son el Partido Nacional, los narcos, los militares, los grandes empresarios y Estados Unidos.

Sobre la posición del Ejército no hay un consenso entre los entrevistados para este informe. “Están distantes, esperando, en un silencio estratégico”, considera un analista. “Están tensos porque capturaron a su antiguo jefe, JOH, y no saben qué esperar de los juicios a JOH en Nueva York”, replica una periodista. “Mel Zelaya se está haciendo cargo del Ejército, para que no se repita la posibilidad de un golpe, y han desplazado a varios generales”, sostiene un activista. “Se ha reducido la influencia de los militares, pero es por presión de Estados Unidos. Les advirtieron directamente durante la campaña de 2021 que no podían participar de un fraude electoral”, considera un diplomático.

Para un periodista salvadoreño que ha cubierto el país: “En la alianza conservadora, JOH y el Partido Nacional eran el centro del poder. En los negocios corruptos con



empresarios, era un 'joint venture' y ellos tenían que participar; en el narcotráfico, igual. Por eso JOH antes no permitía extradiciones y luego reformó la ley para suavizar penas por tráfico de drogas. El problema con los narcos y los caciques regionales es que ahora que ya no está JOH, van a preguntar quién es el interlocutor desde el Estado, porque el tráfico de drogas no parará”.

Otro actor, el sector privado hondureño, está menos cohesionado y es menos influyente que en otros países centroamericanos.

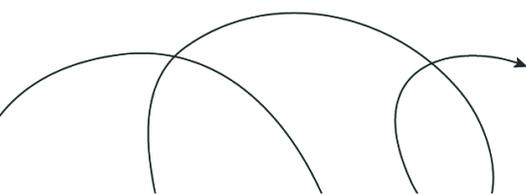
Por una parte están los grandes empresarios más conservadores, que apoyaron hasta el final a JOH, y están asentados en Tegucigalpa o en el interior del país. Entre los de la capital se encuentran los Canahuati, Atala, Flores Facussé o Nasser.

Por otra parte están los empresarios más modernizantes, situados en San Pedro Sula y Puerto Cortés, en el Atlántico. Activistas consultados destacan entre ellos a Eduardo Facussé como un empresario de vocación democrática y de diálogo, dispuesto a aumentar salarios mínimos o mejorar las condiciones laborales. “Tiene conciencia de que con JOH tocamos fondo y que Honduras necesita de reformas para salir del agujero en el que se encuentra”, dijo un activista entrevistado.

La cercanía de JOH con el narcotráfico y la presión estadounidense hicieron también que otros empresarios de la banca y la telefonía marcaran distancias desde 2021 con el Partido Nacional.

“Aunque estén divididos y algunos empresarios están dando un compás de espera y el beneficio de la duda al Gobierno, otros grandes empresarios son los grandes opositores y boicoteadores de las reformas, o de la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). El problema es que el capital tiene muchas cartas para jugar contra el Gobierno, desde lobby en Washington hasta la presión desde sus medios de comunicación. La presidenta Xiomara tendrá el reto de comunicar bien sus reformas y sus políticas”, dice un activista que ahora es parte del Gobierno.

El papel de EEUU



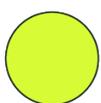
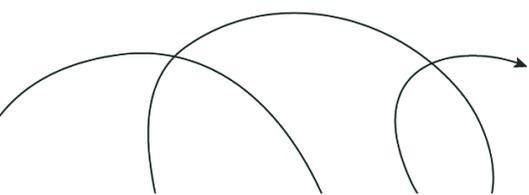
Otro poder fáctico fundamental en la historia hondureña es Estados Unidos. El gobierno de Obama no logró frenar el golpe de Estado de 2009 por la oposición republicana en su Congreso y aisló al gobierno hondureño, pero el Partido Nacional recobró el poder y la legitimidad en 2013. Con el gobierno de Trump, se validó el fraude electoral de 2017 y no se cuestionó públicamente la simbiosis con el narcotráfico, hasta que llegó el gobierno de Biden y Harris. [Según The Newyorker](#), en enero de 2021, cuando fue informada sobre esta simbiosis con el narco, la vicepresidenta Kamala Harris, antes fiscal, propuso: “Let’s go get him now” (capturémoslo ahora), pero le explicaron que Washington tiene una política no escrita de no capturar a jefes de Estado en funciones por lo que 20 días después de que dejara el poder, a requerimiento de Estados Unidos, JOH estaba esposado y en la cárcel.

“Biden y Harris tienen mucho mejor comprensión de causas de migración, como la pobreza, la corrupción, la violencia y el narcotráfico”, dijo un funcionario hondureño. El problema, añadió un activista, es que Estados Unidos interfiere mucho y nunca va a poner atención en temas de economía social, reformas agrarias o agendas para favorecer la organización de los excluidos.

3. Espacios cívicos

A pesar de los esfuerzos autoritarios de la alianza gubernamental de JOH, la resistencia de las organizaciones de la sociedad civil hondureña, apoyadas por la cooperación europea y estadounidense, permitió que el espacio cívico sobreviviera este invierno de 12 años.

Las redes sociales como espacios cívicos de difusión y discusión de ideas estuvieron comprometidas durante los dos períodos presidenciales de JOH. Según medios internacionales como [The Guardian](#) y [Time](#), Juan Orlando Hernández tuvo a su favor durante la presidencia “actividad coordinada inauténtica” en Facebook, que está prohibida por la plataforma y que en determinado momento representaba el 90% de toda la actividad inauténtica de esa plataforma que se daba en Honduras. A pesar de que fue denunciada en 2018 Sophie Zheng ex funcionaria de Facebook, permitió que la actividad permaneciera hasta que finalmente las cuentas que inflaban con likes las publicaciones del presidente fueron removidas en 2019.



Así mismo, este tipo de coordinación inauténtica enfocó esfuerzos en contra de Manuel Zelaya y Xiomara Castro. Por ejemplo, [Time](#) menciona que en octubre de 2021 se acusó falsamente a Castro de juntar fuerzas con el político condenado en Estados Unidos por lavado de dinero, Yani Rosenthal. Este tipo de actividad no solamente se dio en Facebook sino que cuentas de Twitter coordinadas con portales web para promover estrategias digitales en un entorno electoral de las que sólo el partido de JOH se podría beneficiar.

Esta actividad inauténtica consistió en robustecer los likes de las publicaciones de la página de Facebook de JOH, [comentar y amplificar](#) contenido positivo sobre él y generar contenidos malintencionados en contra de la campaña de Castro para las elecciones que se realizaron el 28 de noviembre.

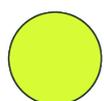
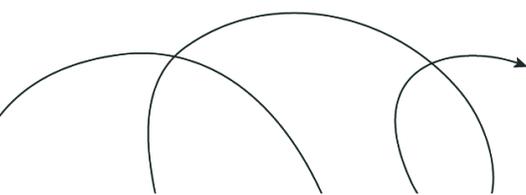
De hecho, para un periodista centroamericano especializado en el país, “Honduras cuenta con una sociedad civil robusta, quizás más robusta que en el resto de Centroamérica (CA-4). Empezó a organizarse tras el Huracán Mitch en 1998, cuando se dió inicio a una relación con el mundo de la cooperación a partir de la ayuda humanitaria. A esto hay que sumar las luchas históricas, ambientales e indígenas. Ante el Golpe de 2009, la sociedad civil fue la resistencia. Aumentó la represión, llegando incluso al asesinato de Berta Cáceres en 2016, y esto incrementa la interlocución política de las organizaciones con Europa. Por eso es que las organizaciones cuentan con mucho poder simbólico en este momento”.

La sociedad civil, coinciden activistas, analistas y periodistas entrevistados, se trazó como meta principal revertir el Golpe de 2009 y el fraude de 2017 por lo que se aliaron con Xiomara Castro y Mel Zelaya, desde una posición de fuerza. Un político de Libre replica: “Xiomara y Mel son fieles creyentes en los movimientos sociales, y por eso buscaron la alianza con organizaciones de la sociedad civil, para hacer un gobierno participativo”.

Para las organizaciones

El dilema que enfrentan las organizaciones sociales en este momento es cuál es la mejor alternativa para asegurar y aumentar los espacios cívicos:

- a) Que sus líderes participen del gobierno de Xiomara Castro.
- b) Respaldo sus políticas y reformas que coincidan con su agenda.
- c) Mantener el rol fiscalizador tradicional de las organizaciones civiles.



Una entrevista para este informe ayuda a mostrar esta disyuntiva:

- ¿Cuáles deberían ser las prioridades de la sociedad civil para este 2022?, se le preguntó a una persona de gran liderazgo entre las organizaciones.
- Estar atentos para apoyar y defender las políticas de la presidenta Xiomara. No hay que dejarla sola porque no se tienen los votos suficientes en el Congreso y está siendo bien difícil gobernar. Y eso que en el Gobierno hay gente buena.

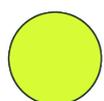
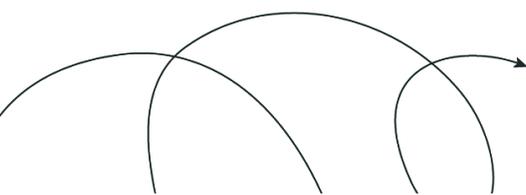
- ¿No cree que puede ser peligroso un acercamiento demasiado intenso con el Gobierno, pensando en la experiencia de la sociedad civil y el FMLN en El Salvador (que tras su simbiosis con el gobierno de izquierda quedó desarticulada cuando ocurrió la llegada de Nayib Bukele)?
- Sí, a mí también me preocupa mucho eso. Quizás la frontera sea no ejecutar fondos del Estado, porque con eso acaban con la independencia de las organizaciones.

Un analista más lejano del Gobierno lo resume así: “Están asumiendo el riesgo de estar cerca del poder, de los Zelaya Castro, que tienen su veta autoritaria y pregonan que ‘si no estás conmigo, estás contra mí’. Si se es crítico, hay un riesgo de la cancelación, de convertirse en parias con las demás organizaciones, entre las que hay mucha desconfianza. Ahora las organizaciones no cuestionan el nepotismo, ni que en la ley de amnistía se incluyan delitos de corrupción, o que la Presidenta diga que no respetará las órdenes judiciales que considere en contra de la soberanía popular. En tiempos de JOH la sociedad civil dudaba de hablar por miedo, ahora duda porque no quiere traicionar”.

Para las organizaciones hondureñas, la disyuntiva no es sencilla, por otros dos elementos:

- a) Las primeras “victorias sociales” que ha logrado el gobierno de Xiomara Castro y el Congreso de la alianza del partido Libre sobre temas que las organizaciones de la sociedad civil han impulsado durante las últimas décadas.
- b) La relación con los cooperantes y los límites a la participación política.

a) Sobre las “victorias” de las primeras cinco semanas se cuentan la Ley de Amnistía para los delitos políticos creados después del Golpe de 2009, la derogación de la Ley de Secretos de Estado que dificultaba la fiscalización social de fondos públicos, o la cancelación presidencial de los permisos de minería a cielo abierto. Tres primeras reformas contundentes.



El compromiso de Xiomara Castro con la sociedad civil, hasta ahora, ha sido decidido. “Hay una decisión de hacer un gobierno participativo”, afirma un funcionario del partido Libre, “por eso en la transición organizamos mesas de trabajo para el tema económico y para el tema social, en donde campesinos, obreros, pueblos originarios, maestros, etcétera, presentaron sus planteamientos concretos para políticas públicas”.

Se desconoce si ese apoyo durará todo el mandato de Castro de Zelaya. Lo que empieza son las tensiones entre líderes sociales y partidarios de Libre. “Entre gente de Libre hay malestar por nombramientos de gente de la sociedad civil; ellos sienten que porque fueron gaseados alguna vez (en alguna manifestación), ya tienen derecho de piso”, dice una activista.

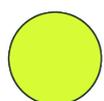
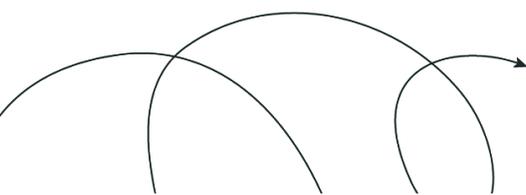
b) Sobre la relación y los límites que tienen los cooperantes sobre la participación política de las organizaciones *grantees*, es algo que tendrán que resolver. Antes de la elección del 28 de noviembre de 2021, el excanciller guatemalteco Edgar Gutiérrez decía en una [entrevista](#) que “la idea del gobierno de Biden de trabajar con la sociedad civil y no con los gobiernos es romántica pero no muy realista. En ausencia de una gobernanza sólida, la sociedad civil puede alcanzar logros modestos en el desarrollo, pero no puede reemplazar las funciones de un Estado-nación”.

Los donantes tendrán que resolver una disyuntiva, pues habrá organizaciones cuyos líderes podrían ser invitados a formar parte del Gobierno. Si cortan el financiamiento a esas organizaciones, las pondrán en la necesidad de recibir fondos públicos y ser cooptadas del todo. Los entrevistados coinciden que es un buen momento para el fortalecimiento institucional de las organizaciones y para esto es indispensable el apoyo de la cooperación internacional.

Las prioridades desde la sociedad civil

Independientemente de cómo se resuelva la disyuntiva de las organizaciones sociales, necesitan avanzar en las prioridades mientras dura tanto la simpatía del nuevo Gobierno por sus demandas, como la alianza mayoritaria en el Congreso entre el partido Libre y sus aliados del PSH, de Salvador Nasralla, el primer designado vicepresidencial.

Varios de los y las activistas y periodistas que fueron entrevistadas coinciden en dos prioridades para la sociedad civil hondureña:



1. Garantizar espacios institucionales para que las organizaciones sociales participen de las tomas de decisiones dentro del Estado, como ocurrió con el Consejo Asesor de Seguridad (CAS) en Guatemala, o como ocurre en Honduras con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) o está ocurriendo con el COFADEH en su rol para evitar excesos en la Ley de Amnistía sobre delitos creados tras el Golpe.
2. Desmantelar el andamiaje anti-ONGs que creó el gobierno del Partido Nacional. “Con la dictadura había miedo, exilio, asesinatos, criminalización. Estábamos a la defensiva. Necesitamos volver a juntarnos para analizar, proponer, construir”, dice un activista.

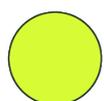
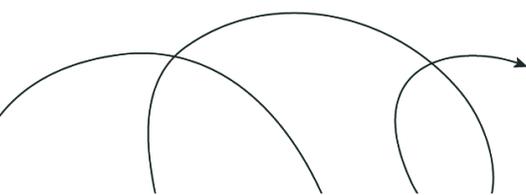
Un diplomático radicado en Honduras abona en que debe aprovecharse esta oportunidad de “tregua” en la relación entre el Gobierno y las organizaciones para fortalecerlas institucionalmente, en temas jurídicos, administrativos, contables y fiscales.

Dentro de las oportunidades en este momento político está también la de fortalecer el periodismo independiente y acercarlo a las organizaciones sociales de base, que todavía tienen como referentes a medios tradicionales (televisivos, impresos y radiales), que son en diferentes grados opositores a la agenda reformista. Consultados sobre medios independientes, de la tradición de otros centroamericanos como *El Faro* o *Plaza Pública*, mencionaron a *Radio Progreso*, *Criterio* o *Contracorriente*, que son una radio dirigida por los jesuitas y dos medios digitales recientemente fundados.

En materias temáticas, los entrevistados de la sociedad civil coinciden en tres prioridades:

- a) temas sociales-ambientales,
- b) desmantelar el modelo de desarrollo corrupto y que provoca tanta migración (incluyendo un Pacto Fiscal)
- c) leyes que permitan luchar contra la corrupción y la impunidad.

En el tercer tema, destacan las propuestas anti-corrupción que elaboró la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH-OEA) con apoyo de la sociedad civil, pero también las encaminadas a preparar la infraestructura legal e institucional para la investigación de casos paradigmáticos, más profundos, como los de la CICIG. Entre estas reformas están la de la creación de Juzgados de Alto Impacto,



que permitan la independencia judicial, inspirados en el caso guatemalteco, así como la legalización de métodos especiales de investigación o la creación de la figura de colaborador eficaz.

Hubo un tema en el que la MACCIH no avanzó: dismantelar y procesar a los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos (CIACS) enquistados en el Estado o permitidos por éste. CIACS es un concepto creado en Guatemala para describir a las estructuras que amenazaban, allanaban y asesinaban a líderes sociales y organizaciones de la sociedad civil entre 1996 y 2003. Además, eran responsables de ‘ejecuciones extrajudiciales de jóvenes pobres sospechosos de delinquir’. Por eso se convirtió en la primera prioridad para la CICIG desde su instalación en 2008. Así, se logró reducir de 48 asesinatos por 100 mil habitantes hasta 15 por cada 100 mil en 2020. Además, permitió ampliar y robustecer el espacio cívico entre 2008 y 2020.

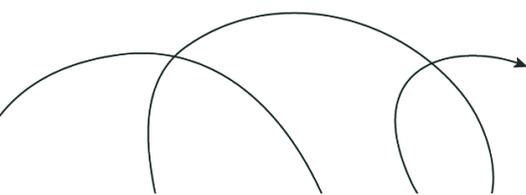
La lucha contra los CIACS estuvo ausente de la agenda de la antigua MACCIH de la OEA y no es central en el debate público hondureño, a pesar de ser indispensable para garantizar la vida de los y las activistas y líderes de las organizaciones de la sociedad civil.

La posibilidad de avances en derechos sexuales y reproductivos

Aunque el tema de género no ha sido una de las prioridades del nuevo gobierno en estas primeras semanas, Honduras es el único país de los cuatro de Centroamérica (CA-4, sin Costa Rica ni Panamá) en el que por primera vez hay una ventana de oportunidad para avanzar en los derechos de las mujeres, con la presidencia de Xiomara Castro.

“A más de un mes de que la primera mujer llegó a la Presidencia, poco se ha hablado de género desde el Ejecutivo. El gobierno de Xiomara Castro, con un gabinete con solo 22% de mujeres, se enfrenta a sus promesas de campaña: la reducción de los femicidios, la despenalización del aborto por 3 causales y la aprobación de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), prohibida desde el golpe de Estado de 2009,” [mencionó](#) el medio alternativo ContraCorriente.

En enero de 2021, el Congreso del Partido Nacional hizo una ‘reforma constitucional’ para criminalizar el aborto, sin excepción por incesto, violación, deficiencia fetal o cuando está en riesgo la vida de la mujer. La aprobación se hizo sin seguir el procedimiento constitucional de tres debates; el Congreso “se dispensó” de esa



formalidad y lo hizo en un solo debate, por lo que la norma debería ser sujeta de una anulación judicial. La ONU [protestó en su momento](#) por esta regresión en materia de derechos humanos de las mujeres.

Xiomara Castro ha mostrado acercamientos con organizaciones feministas, ha habido políticas de capacitación a la policía para luchar contra la violencia de género –para cumplir con la primera promesa sobre femicidios– y ofreció elevar a rango ministerial el Instituto de la Mujer.

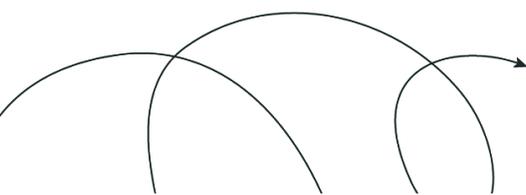
Para las otras dos promesas, [de legalizar el aborto en tres causales o la píldora del día después \(PAE\)](#), Castro necesitará de los votos mayoritarios del Congreso. Para esto es importante recordar que Honduras es Centroamérica, en donde un presidente autoritario con una popularidad arriba del 85%, como el salvadoreño Bukele, reculó en su idea de despenalizar el aborto en una reforma constitucional. Y es vecina de Guatemala, cuyo gobierno está liderado por ex militares, empresarios y evangélicos, una alianza similar a la del Partido Nacional de Honduras. La alianza gubernamental guatemalteca el 8 de marzo de 2022 aprobó una reforma para criminalizar incluso la opinión pública sobre despenalizar el aborto. Esta reforma no logró finalizar el proceso para convertirse en ley.

Uno de los periodistas consultados para este informe dijo que “este año podría ser posible avanzar en la agenda de derechos de las mujeres, pero solo si Xiomara Castro decide empeñar parte de su capital político en este tema. El opositor Partido Nacional, deslegitimado por el tema de JOH y el narco, ansía que Xiomara intente aprobar algo sobre este tema para oponerse y volver a ganar legitimidad política con la ciudadanía más conservadora y hacer que el país se olvide de JOH y el narco”.

Linterna logró entrevistar a uno de los diputados más influyentes del actual Congreso, que respondió que considera que en este momento las posibilidades de que avance una despenalización del aborto “están alrededor de un 30%” y las posibilidades de despenalizar la PEA, “en un 40%”. Dependerá de la habilidad de las organizaciones de sociedad civil para convencer a la presidenta Castro y al resto del Congreso para aprovechar el momento político.

La situación contrarreloj

De regreso en materia de amenazas contra las organizaciones de la sociedad civil, “todavía está el poder represor intacto, pero hay un cambio de espíritu en el país”,



resume un periodista especializado en Centroamérica. Este cambio de aires, por ejemplo, ha hecho que la Sala Constitucional de la Corte Suprema haya decidido liberar a los ocho activistas ambientalistas presos hace casi tres años por protestar contra una minera en el Río Guapinol, en el Norte de Honduras. Esto ocurrió incluso antes de que la presidenta Xiomara Castro decidiera poner fin a la minería a cielo abierto en el país.

Este cambio de espíritu cuenta a su favor con que el Partido Nacional no esperaba una captura tan rápida de su líder Juan Orlando Hernández y está “como gallina sin cabeza”.

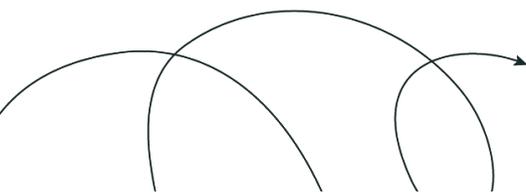
No obstante, desde la sociedad civil, periodistas independientes y el Gobierno, perciben el inicio de una oposición férrea por parte de los medios tradicionales, televisivos, radiales e impresos, en contra de la agenda reformista del Gobierno. Los medios independientes son minoritarios.

“La bancada del partido Libre empezó a resquebrajarse desde antes de la toma de posesión y sabemos que Salvador Nasralla (quien hace las veces de vicepresidente) tiene genes del Partido Nacional y pronto renunciará y se convertirá en oposición”, lamenta una activista.

Desde el Congreso, en el partido Libre calculan que Nasralla (partido PSH) abandonará el gobierno durante el segundo semestre de 2022, al darse cuenta que no es un “co-presidente de Xiomara Castro”, como él hubiera anhelado. Esto dificultará las posibilidades de avanzar en la agenda de reformas en el Congreso que tiene el gobierno de Xiomara Castro y Mel Zelaya. No obstante, el entrevistado confía que los ministros del PSH y muchos diputados del PSH no seguirán a su fundador sino que se mantendrán en la alianza del Gobierno.

Más allá de la oposición de los medios, los empresarios o la futura posición de Nasralla, dentro de las organizaciones sociales y la alianza gubernamental hay otras preocupaciones más profundas para 2022.

“Nunca había sido tan complicada la transición después de un gobierno del Partido Nacional. Es que son 12 años fuera del Estado, y la debilidad institucional y el descalabro del país es muy profundo. No hay recursos fiscales, hay muchos jóvenes de movimientos sociales que fueron nombrados en el Gobierno y la curva de



aprendizaje es grande. Esto hará que las reformas no se logren tan rápido”, advierte un diplomático hondureño.

Por otra parte, están percibiendo una resistencia de la Secretaría General de la ONU, de Antonio Guterres, por embarcarse en la aventura de la CICIH, y eso sería un golpe para las esperanzas de la ciudadanía, y las posibilidades de combatir la impunidad, la corrupción y proteger el espacio cívico. Para revertir esto necesitarán del cabildeo en Nueva York y en Washington de fundaciones, organizaciones y gobiernos aliados de la democracia en Honduras.

Un funcionario concluye así: “Hay voluntad política y un compromiso de abrir espacios y que la sociedad civil recupere su lugar. Pero tenemos retos muy complejos por delante, y pocos recursos. Todo dependerá de nuestra capacidad de cohesión y de articulación”.

Centroamérica, 10 de marzo de 2022.

